

## 10.5. SINDICATOS, CRISIS ECONÓMICA Y REPERTORIOS DE PROTESTA EN EL SUR DE EUROPA

Holm-Detlev Köhler, Sergio González Begega  
y David Luque Balbona <sup>1</sup>

### INTRODUCCIÓN

La periferia sur de Europa se ha convertido en uno de los escenarios, a escala internacional, en los que la crisis económica ha tenido un mayor impacto en términos de contracción de la actividad, desempleo y crecimiento de la desigualdad. La distribución de los esfuerzos derivados de la necesidad de alcanzar los objetivos de consolidación fiscal y de mejora de la competitividad impuestos desde las instituciones europeas sobre España, Italia, Portugal, Grecia y, en menor medida aún, sobre Francia, ha sido expresada de forma altamente inequitativa. A lo largo del período 2008-2012, la merma de la renta disponible por los hogares y la reducción de coberturas sociales asociada a la racionalización del Estado del Bienestar, ha provocado el fortalecimiento de uno de los rasgos de estructura social más persistentes de este conjunto de países: la desigualdad. La crisis ha evidenciado la fractura social en el sur de Europa. El bajo nivel de cohesión entre colectivos sociales incluidos y excluidos del mercado laboral, afectados por las formas regulares o atípicas de empleo o cubiertos y no cubiertos por unos mermados dispositivos de protección social ha intensificado los problemas de *dualización*. El crecimiento de las diferencias intra-sociales no solamente ha recibido una expresión económica sino que, por ejemplo, también puede ser descrito a partir de un eje generacional.

La gestión de la crisis económica por parte de los gobiernos nacionales, siempre a la sombra de las directrices de Bruselas, ha empujado a muy

---

<sup>1</sup> H.-D. Köhler, Sergio González Begega y David Luque Balbona son profesores del departamento de Sociología de la Universidad de Oviedo, Campus del Cristo s/n, 33006 Oviedo. Correos electrónicos respectivos: [hkohler@uniovi.es](mailto:hkohler@uniovi.es); [gonzalezsergio@uniovi.es](mailto:gonzalezsergio@uniovi.es); y [luquedavid@uniovi.es](mailto:luquedavid@uniovi.es).

distintos actores sociales, entre ellos a las organizaciones sindicales, a redescubrir viejas formas de protesta; pero también a explorar otras nuevas. Una de las consecuencias inmediatas de los programas de ajuste puestos en marcha en este conjunto de países ha sido el incremento del nivel de conflictividad, tanto en el ámbito económico dentro del que los sindicatos ostentan el liderazgo de la representación de los intereses laborales como en el ámbito civil, con la emergencia de nuevos (y en algunos casos, inesperados) movimientos sociales.

La intensidad de la contestación social no debe explicarse, a pesar de todo, únicamente a partir de la crisis y sus consecuencias. No es solo la coyuntura económica la que ha ubicado a las organizaciones sindicales en medio de un nuevo frente de contestación junto a los nuevos movimientos de la sociedad civil. Por supuesto, tanto en España como en el resto de países de la periferia sur de Europa, la reacción social es resultado del profundo malestar provocado por los instrumentos económicos diseñados para facilitar la salida de la crisis. Pero junto a esta explicación netamente económica, el descontento social también ha sido el producto del fuerte deterioro experimentado por los principales actores e instituciones del sistema de representación pública. La crisis en Europa es evidentemente económica, pero sus estribaciones políticas no deben dejar de ser observadas cuidadosamente. La inestabilidad del sistema político, expresada en la dificultad para mantener coaliciones estables de gobierno, como en caso de Grecia, sostener el respaldo electoral a largo plazo y adquirir posibilidades de renovación de mandato, como en Portugal, España o Francia, o evitar la desafección ciudadana y la desconfianza hacia “lo político”, cuando no directamente la preferencia por soluciones “técnicas”, como en Italia, ha rebasado los tradicionales espacios de preocupación ciudadana por la corrupción o la ineficiencia. La percepción de las instituciones del Estado y de sus actores como un problema añadido a la situación económica antes que como un factor de eventual solución de la misma ha ido madurando en todos estos países; con mayor o menor visceralidad según el

momento, pero en cualquier caso como un elemento común de los procesos de protesta social.

Los sindicatos de clase han desempeñado un papel esencial como agentes canalizadores de este doble descontento, aún cuando su vasto legado de responsabilidades políticas dentro del sistema les sitúa en una situación compleja. El perfil de los sindicatos como organizaciones con una fuerte capacidad de liderazgo de la protesta económica y civil que acompaña a la crisis ofrece algunos contornos difusos. Más aún cuando, desde el imaginario de la reacción civil, los sindicatos ofrecen anclajes con aquellos actores (los partidos políticos) y soluciones de representación hacia los que más decididamente se dirigen las protestas.

Las organizaciones sindicales, no obstante, parecen haberse embarcado en un viaje orientado a buscar la forma de desprenderse de esos anclajes y encontrar una posición en las lindes del sistema como portavoces de un conflicto que ha trascendido las fronteras del ámbito estrictamente laboral y se expresa en términos de resistencia de una significativa porción de la sociedad civil, crecientemente descreída y molesta. Este hecho confronta al movimiento sindical con algunos problemas sustantivos de configuración identitaria, en absoluto nuevos, pero que el escenario de crisis ha contribuido a hacer más explícitos. Más allá de los problemas de ambigüedad, de co-responsabilidad o de herencia, las organizaciones sindicales ya no están solas ni mucho menos monopolizan la representación de los distintos colectivos de ciudadanos descontentos en el actual marco del conflicto social. Las organizaciones sindicales han pasado a compartir el espacio de la contestación con un conjunto de nuevos actores que han emergido y se han consolidado con la propia crisis. Ello les confronta ante nuevos retos. En primer lugar, se trata de reactivar las estrategias tradicionales de acción colectiva, como la huelga. Pero también, de escrutar nuevas formas de expresión del descontento, en alianzas más o menos estables con los nuevos actores de la sociedad civil.

El objetivo de este capítulo es examinar, precisamente, la posición y los retos a los que se han enfrentado los sindicatos en un contexto de heterogeneización de los modelos de acción colectiva y de los repertorios de protesta. Para ello, se propone examinar el programa sindical de resistencia a la crisis en la Europa del Sur o, más exactamente, las soluciones estratégicas de oposición a los paquetes gubernamentales de gestión de la misma. Las similitudes del contexto y de los problemas económicos, sociales y políticos afrontados (y no necesariamente en este orden) por este conjunto de países permiten efectuar un análisis comparado del modelo de movilizaciones que ha ido definiendo sus características a lo largo del periodo 2008-2012. Más allá de la existencia de distancias históricas e institucionales que explican el mantenimiento de cierta diversidad en cuanto a modelos de articulación, virulencia y resultados del catálogo de protestas, lo cierto es que los países del Sur de Europa ofrecen un espacio enormemente apropiado para abordar el análisis de la reacción sindical ante el impacto de la crisis.

La estructura del capítulo será la siguiente. Tras el presente apartado de introducción, se ofrecerá una sección que buscará contextualizar el actual escenario de redefinición estratégica al que se enfrentan las organizaciones sindicales. Los retos que enfrentan ahora los sindicatos al intentar mantener el liderazgo del conflicto social deben ser entendidos como el resultado de un proceso de más largo alcance, del cual la actual crisis económica no sería sino una fase más, y que ha supuesto el encumbramiento de la *narrativa* ultraliberal como interpretación dominante de la relación entre economía, ciudadanía y Estado desde la década de los años ochenta. A continuación, y con un mayor detalle, se examinará el repertorio de protestas puesto en marcha en los países de la Europa del sur, a partir de la afinidad de sus respectivos modelos de relaciones laborales. Además de España, se escrutarán los senderos de la acción colectiva en Portugal, Italia y Grecia, además de Francia, dentro de la más reciente fase de aplicación de medidas políticas en el contexto de crisis. La posición de los sindicatos, así como sus reacciones a los estímulos planteados por los programas de ajuste, permitirá analizar en cada caso la

combinación de formas tradicionales de movilización, tales como huelgas generales y conflictividad económica de carácter laboral, con nuevos repertorios de protesta.

Esta contribución al Anuario del Conflicto Social 2012 se cerrará a través de un apartado de discusión en el que, además de una recapitulación de las secciones anteriores del artículo, se ofrecerá una reflexión general acerca de las preguntas estratégicas que tratan de responder las organizaciones sindicales dentro del complejo escenario de movilización social que acompaña a la crisis.

*LOS SINDICATOS ANTE LA CRISIS ECONÓMICA. LA NARRATIVA ULTRALIBERAL COMO INSTRUMENTO DE DOMINACIÓN*

Dani Rodrik (2012) explica la emergencia y progresiva extensión del paradigma ultraliberal desde comienzos de la década de los años ochenta como el resultado de la configuración de una interpretación interesada del proceso de globalización económica, además de como una realidad objetiva en sí misma. La descomposición del Estado-nación como marco de los intercambios políticos y económicos y como espacio de regulación de los mismos respondería, según este autor, a un asalto intencional de las estructuras de gobierno democrático sobre las cuales se ha sustentado la estabilidad (y también el crecimiento económico) de las sociedades del mundo desarrollado desde mediados del siglo XX:

La globalización económica (...) descansa sobre pilares inestables. A diferencia de los mercados nacionales, que suelen contar con el apoyo de instituciones políticas y reguladoras nacionales, los mercados globales están débilmente integrados. No existe ni una autoridad global en defensa de la competencia, ni una entidad crediticia global de último recurso, ni una agencia reguladora global, ni una red de seguridad global y, por supuesto, no existe democracia global. (...) Este desequilibrio entre el alcance nacional de los gobiernos y la naturaleza global de los mercados constituye el talón de Aquiles de la globalización. (Rodrik, 2012:18.)

La visión ultraliberal de la globalización como un *continuum* ahistórico (Fukuyama, 1992) y, dentro de ella, de la actual crisis como una fase más del proceso *natural* e irrefrenable de convergencia económica constituye, al convertirse en discurso, un poderoso recurso de poder, un instrumento de dominación a la *Bourdieu*. Aproximarse al argumentario ultraliberal de esta forma implica desenmascararlo como un ejercicio más o menos explícito de violencia simbólica, desacreditadora y represiva de cualquier tipo de exégesis disonante (Touraine, 1999; 2011).

En este sentido, el largo momento de recesión que atraviesan las economías occidentales y, sobre todo, su monolítico modelo de gestión política, tal y como se ha venido imponiendo a escala internacional, no constituye únicamente una agenda de control de la sociedad por parte del mercado sino una completa rearticulación del modelo de toma de decisiones públicas que impone la mercantilización de los derechos de participación política y de la ciudadanía.

El nuevo Estado ultraliberal es una poderosa narrativa cuyos objetivos últimos son la implementación del *workfare* disciplinario, entendido como la extensión de las formas atípicas y precarias de empleo sin o con muy baja densidad de cobertura social; la extensión del *prisonfare* punitivo, a través de la represión caricaturizadora o criminalizadora de la protesta social y de la pobreza; y la atomización de la responsabilidad del ciudadano, reducido a individuo a servicio de la economía y de los mercados.

Todo ello, insiste Tzvetan Todorov (2012:101), a través del discurso: “al exigir adhesión ciega a sus postulados, que presenta como verdades científicas (...), el ultraliberalismo se convierte en una suerte de religión secular, a veces difundida con estrategias de promoción que nos recuerdan a las que utilizaron los [regímenes totalitarios]. Su proyecto nos hace pasar de un extremo al otro, del «todo Estado totalitario al todo individuo ultraliberal», de un régimen liberticida a otro *sociocida*, por así decirlo”, pero ambos igualmente omniscientes.

El proyecto ultraliberal, precisamente por ese objetivo de omnisciencia, se aleja del modelo de Estado mínimo propio de la visión clásica *smithiana*. Representa una imagen inversa “y no obstante simétrica” del totalitarismo. Como nuevo Leviatán, el Estado ultraliberal sigue monopolizando y distribuyendo los bienes públicos, transfiriéndolos discrecionalmente desde el ala social hacia el ala penal del aparato público:

El Estado penal se ha presentado en los países que han elegido el camino (neo)liberal porque promete ayudar a resolver los dos dilemas que crea la mercantilización para el mantenimiento del orden social y político. Primero, porque reprime los crecientes trastornos y rupturas causadas por la normalización de la inseguridad en la base de la estructura social (...); y en segundo lugar, porque restaura la autoridad de la elite gobernante reafirmando “la ley y el orden” justamente cuando dicha autoridad está siendo socavada por los flujos de dinero, capital, comunicaciones y personas a través de las fronteras nacionales. (Wacquant, 2012: 70).

La narración ultraliberal, al apropiarse del Estado, reduce el riesgo inherente al proceso de globalización y los problemas asociados a la restricción de la acción estatal por parte del capital financiero y de las instituciones supranacionales. Pero lo hace de una forma altamente inequitativa y solo para algunos, que se convierten en ganadores dentro de esta transacción, mientras se deriva la incertidumbre hacia el resto de ciudadanos.

En Europa, quizás más que en otros lugares, donde las soluciones políticas para dar salida a la crisis están adquiriendo un carácter crecientemente heterodoxo, el discurso ultraliberal -en realidad y siendo correctos, ordoliberal, a la manera de la Escuela de Friburgo (Vanberg, 2004)- ha dejado el campo abierto para el enriquecimiento ilimitado por parte del capital financiero especulativo que, a través de su control *técnico* del Estado, organiza la transferencia masiva de recursos públicos desde las políticas sociales a las penales de orden público. Al mismo tiempo, procura la marginación de aquellas organizaciones y movimientos sociales que defienden un modelo distinto de redistribución de la riqueza por parte del Estado, similar al vigente en las economías occidentales antes de la era de la globalización y que respondía a

un equilibrio keynesiano-fordista. En Europa, la intensidad de la crisis es explicable, por supuesto, a partir de la deficiente arquitectura de la moneda única. Pero obtusa observancia de los cánones (ordo)liberales por parte de la tecnocracia europea es el resultado de un proyecto intencional y que responde a una nueva lógica de supeditación del interés social del conjunto de la ciudadanía al de un número reducido de intereses que habrían expugnado el espacio de las políticas públicas desde el mercado.

Los sindicatos del sur de Europa enfrentan la narrativa ultraliberal desde el frente de la resistencia a este discurso de dominación y a la realidad objetiva que interpreta. Y ello a pesar de su co-responsabilidad en el articulado del paradigma ultraliberal como narrativa dominante, en buena medida como resultado de la desorientación ideológica que asola al discurso de izquierdas en las dos últimas décadas del siglo XX (Simone, 2012, *inter alia*). A partir de esta misma desorientación, cabría explicar la decidida participación de las organizaciones sindicales europeas en los acuerdos de “corporatismo competitivo” que pavimentan la entrada en la Europa del Euro y que se encuentran en el origen de la actual crisis (Rhodes, 1998).

El problema para los sindicatos, no obstante, tal y como apuntaba Robert Boyer (1996) hace ya más de quince años y ha seguido explorando la abundante literatura sobre estrategias de revitalización sindical (Kelly y Frege, 2004, otra vez *inter alia*), es el papel completamente marginal que el propio discurso de la globalización reserva para ellos, como el rescoldo de un mundo nacional e industrial que ya no es y que no volverá a ser. La reacción sindical ante la crisis y la búsqueda de estrategias que le permitan seguir ocupando una posición de liderazgo dentro del frente de protesta civil es, en buena medida, una lucha por su propia supervivencia como actores aún relevantes dentro del nuevo escenario post-nacional y post-industrial.

El sindicalismo se enfrenta a un creciente debilitamiento objetivo en términos de recursos y de soporte social que se ve acompañado por la marginación política de su discurso. La narrativa dominante le sitúa en un universo de

actores obsoletos mientras la emergente economía de redes transnacionales volátiles le convierte en disfuncional para el mantenimiento del nuevo orden público. A ello deben sumarse los problemas de fragmentación de su base social que dificulta la acción colectiva solidaria. La pérdida de vigor del trabajo como elemento de configuración de la identidad individual y el difuminado de la norma social del empleo en su forma industrial acompañan, como amenazas “objetivas”, a los retos *narrativos* que acorralan al movimiento sindical desde que el discurso ultraliberal comenzó a ganar terreno y a encontrar permeabilidad en el debate público, a comienzos de la década de los ochenta.

El sindicalismo se encuentra, en estas circunstancias, *en y ante* la crisis, enfrentándose a retos tanto de carácter “objetivo” como “narrativo”. Los primeros devienen fundamentalmente de la menor capacidad de determinación del binomio trabajo-empleo como norma social (Offe, 1992). La diversificación de las formas laborales a nivel contractual, por la cual el trabajo atípico se extiende y fagocita al típico, la emergencia de nuevos colectivos de trabajadores, el impacto del cambio tecnológico sobre los modelos de trabajo, la consolidación de un modelo de vida laboral flexible, discontinua e inestable o la propia pérdida de identidad del trabajador, como resultado de los procesos de heterogeneización del trabajo anteriormente enumerados, difuminan el soporte social de los sindicatos. La emergencia de los nuevos movimientos sociales, que subrayan facetas distintas a la vida económica se explica a partir de la desintegración de la identidad laboral de los individuos. Junto a retos “objetivos”, las organizaciones sindicales se encuentran ante poderosos retos “de narración”, indisolublemente ligados a los anteriores, como los que desdibujan el marco institucional del Estado-nación como espacio de regulación e intercambio político, ofrecen una visión teleológica, única e incontestable del proceso de globalización, dictan una nueva división del trabajo transnacional según criterios de apertura y competitividad y quiebran el contrato social keynesiano-fordista sobre el que, como afirma Tony Judt (2010), se asentó durante aproximadamente cuarenta años el modelo de capitalismo social de Postguerra.

El conflicto, o más bien la nueva naturaleza del mismo, tal y como es pensado y puesto en práctica por los sindicatos, debe ser entendido como un elemento central en el proceso de readaptación de los sindicatos al nuevo entorno o, desde una perspectiva más radical, de resistencia a ser eliminados. Frente al modelo de conflicto laboral del mundo industrial, de carácter ofensivo y firmemente orientado a la adquisición de derechos sociales, el del escenario post-industrial es reactivo y fundamentalmente defensivo. La dificultad de articular una narrativa capaz de contrarrestar a la ultraliberal y el vigor de ésta como instrumento de dominación explican este viraje, antes incluso que el alcance de las transformaciones económicas y tecnológicas o que la intensidad de la crisis. La falta de un proyecto alternativo ha sumido a los sindicatos en una espiral de precariedad y de negociación de concesiones.

La defensa de derechos sociales adquiridos, no obstante, ha resultado más eficaz en aquellos países, como los del Norte de Europa, que fueron capaces de institucionalizar marcos de relaciones laborales y sistemas de bienestar más densos y desarrollados. En la Europa del Sur, donde estas construcciones nunca alcanzaron la ambición y la estabilidad de sus homólogas del Norte, la estrategia de defensa liderada por los sindicatos ha resultado menos exitosa y se ha cimentado en bases más precarias. A revisar la naturaleza del conflicto socio-laboral en estos países como herramienta de resistencia civil dentro del actual contexto de crisis se dedica, precisamente, el próximo apartado.

#### *CONFLICTO ECONÓMICO-LABORAL Y CONFLICTO POLÍTICO EN LA EUROPA DE LA CRISIS*

El conflicto ocupa una posición central en la literatura sobre relaciones laborales. Tal y como señala Michael Shalev (1989:27), “el conflicto abierto entre trabajadores y empleadores ha sido una preocupación constante desde que las huelgas hicieron su aparición en la escena industrial desde hace ya más de un siglo”. La huelga constituye la expresión más visible del conflicto de trabajo y aquella a la que la literatura académica ha concedido una mayor trascendencia tanto por su relevancia social como por su continuidad histórica.

La huelga se ha convertido en la forma dominante de protesta social dentro de las sociedades industriales y seguramente ha involucrado a más individuos que cualquier otra forma de acción colectiva política o social en los países occidentales a lo largo del siglo XX. Como instrumento de movilización genotípico del movimiento obrero, la huelga de trabajadores a sus distintos niveles, desde la de carácter económico a escala industrial o de centro de trabajo hasta la política y de paro general, ha desempeñado un papel decisivo en la configuración del catálogo propio de protestas del sindicalismo y ha significado, al tiempo, la materialización más plástica del conflicto de clases (Crouch y Pizzorno, 1978).

La huelga, no obstante, dista mucho de constituir un fenómeno uniforme. Las series de conflictividad se encuentran, lógicamente, asociados a los distintos momentos expansivos y regresivos del ciclo económico. Así, desde mediados del siglo XX es posible identificar varias oleadas de actividad huelguística, de contenidos y orientaciones diferentes. Bordogna y Cella (2002) subrayan el carácter recurrente de la huelga como vehículo de expresión del conflicto en la relación laboral, pero al mismo tiempo su sentido fuertemente heterogéneo y polimorfo vinculado al cambio estructural en la economía. Tal y como indican Edward Shorter y Charles Tilly (1974), los cambios en las huelgas no son más que una expresión del proceso de reconfiguración constante del catálogo de protesta de la sociedad civil. La experimentación y eventual consolidación de nuevos repertorios de acción colectiva responde a la forma “cómo el nacimiento [y desarrollo] del capitalismo y de la concentración de poder en el Estado (...) han influenciado las formas en las que las clases populares luchaban, con o sin éxito, a favor de sus intereses comunes” (Tilly, 1986:14).

De esta forma, fenómenos tales como la emergencia de un nuevo modelo de huelgas reactivas que buscan defender antes que consolidar derechos, el desplazamiento de la actividad huelguística desde la arena económica hacia la política o la exploración, por parte de los sindicatos, de formas experimentales de contestación lejos de la esfera industrial, responden a un proceso de transformación del capitalismo y del modelo de Estado, que se ha visto

acelerado por la crisis, pero que es preexistente y cuyo sustento ideológico es, como hemos visto, la narrativa ultraliberal de la globalización.

Esta transformación de largo recorrido, puesto que encuentra su origen a comienzos de la década de los años ochenta, habría modificado los intereses y la estructura de oportunidades de los sindicatos, obligándoles a reorientarse estratégicamente. La actividad huelguística del periodo 2008-2012 en los países del sur de Europa no puede entenderse como el producto simple de la Gran Recesión. La naturaleza dominante de la actividad huelguística ha venido desplazándose hacia movilizaciones demostrativas en el espacio político durante las tres últimas décadas, mientras se reducía de forma muy significativa la intensidad y frecuencia del conflicto de carácter económico (Gallas, Nowak y Wilde, 2012).

El viraje político de las huelgas y la redefinición política de la acción sindical queda contrastado a partir de los datos sobre convocatorias de huelgas generales en Europa. Si entre 1980 y 1989 se produjeron un total de 18 huelgas generales contra los gobiernos nacionales de 16 países de Europa Occidental (Unión Europea más Noruega), el número se incrementa hasta las 26 en la siguiente década y alcanza las 28 en los siete años comprendidos entre 2000 y 2006 (Kelly, Hamann y Johnson, 2011). De entre los países analizados, destacan por encima del resto los mediterráneos, que concentran más del 80% de las convocatorias de huelga general en Europa entre 1980 y 2008. Grecia, con 28 huelgas generales de ámbito nacional lidera la lista, seguida por Italia (13), Francia (10), España (6) y, en menor medida, Portugal (3) (Kelly y Hamann, 2009). Tras 2008, y más allá incluso del incremento en su número, lo que resulta específico del sur de Europa es cómo la actividad huelguística ha ido inclinándose aún más hacia la politización del conflicto (ver Tabla 1, como anexo).

El contexto de crisis económica y la reacción de los decisores públicos ante la misma ha llevado a los sindicatos a adoptar la estrategia de contestación y ruptura, ejerciendo lo que Albert O. Hirschman denominaría una opción de

*salida*, ante la imposibilidad de alcanzar sus objetivos de influencia sobre los procesos de determinación política a través de otros mecanismos de participación, por otra parte cada vez más deteriorados y estrechos. Más allá de que la huelga política forme parte del repertorio histórico de protesta de los sindicatos en estos países, lo cierto es que a partir de 2008 ésta ha ido adquiriendo un nuevo sentido porque los marcos tradicionales del intercambio político entre sindicatos y gobiernos ofrecen un elevado nivel de descomposición.

Los sindicatos del Sur de Europa han reaccionado rompiendo puentes con los gobiernos porque el programa de ajustes, sobre cuyo impacto social y económico ofrecen un reciente y completo análisis Busch, Hermann, Hinrichs y Schulten (2013), porque los objetivos de consolidación fiscal y “recuperación” de la competitividad han sido perseguidos a expensas de los intereses de sus representados. Pero también, porque han podido observar cómo una de las piezas centrales de la agenda de reformas erosionaba seriamente su posición como actor del sistema. La reforma de los mercados de trabajo y de las coberturas sociales para desempleados en varios de estos países se ha visto acompañada por una profunda reestructuración de los principios jurídicos que regulan la estructura de negociación colectiva, cuyo objetivo último no es otro que la descoordinación de las relaciones laborales. Ambos instrumentos han implicado una pérdida de poder para los sindicatos en la determinación de las formas de empleo, tanto en España, como en Italia, Portugal y Grecia (no así en Francia). De ahí la agresividad de la respuesta estratégica ofrecida por los sindicatos, antes incluso en la calle que en la empresa y desde luego priorizando el espacio político sobre el meramente económico. Ahora bien, tal y como indica Vandaele (2011), no han sido los sindicatos los responsables de hacer detonar la paz social, porque su decisión, inevitable y en buena medida forzada, ha sido tomada bajo una seria amenaza y tras resultar marginados, cuando no directamente expulsados, de los procesos de toma de decisiones públicas.

Esta expulsión, y ese es otro de los rasgos centrales del período de protestas 2008-2012 en el Sur de Europa, junto a su carácter fundamentalmente político y defensivo, que ya hemos señalado, ha arrojado a los sindicatos a un nuevo espacio de movilización, en el que ya estaban presentes otras organizaciones de la sociedad civil. Los sindicatos han descubierto que, aunque siguen ocupando una posición central en la definición del conflicto, ya no lo monopolizan. Por ello se han visto obligados a desarrollar un amplio conjunto de esfuerzos de aprendizaje, coordinación y exploración de formas de resistencia no construidas, al menos únicamente, a partir de la identidad laboral.

Los sindicatos han encontrado inesperados aliados en la respuesta a las políticas de ajuste, aunque en la amalgama de voces “indignadas” no falte quien los ha identificado como representantes del mismo sistema contra el que se pretende reaccionar. Esto es así porque los nuevos movimientos sociales, con los que el sindicalismo del Sur de Europa está tratando de tejer una red de acuerdos, tienen aún en su discontinuidad y falta de estructuración mucho de “rebeldía primitiva” (Hobsbawm, 1959). Son, como afirma Todorov (2012: 191), “movimientos espontáneos y poco articulados, que encuentran dificultad a la hora de formular propuestas concretas, pero que cuentan con un sentido bastante claro: rechazan el giro neoliberal que han adoptado los gobernantes de estos países. Todavía no sabemos adónde llevará este movimiento (...), pero está claro que expresa una insatisfacción con el régimen tal y como funciona en estos momentos”. Los sindicatos aportan al frente de descontentos coherencia, continuidad a medio plazo y soporte organizativo. Lo que queda por ver es en qué medida esta solución puede resultar sostenible y anticipar plataformas de actuación conjunta como la Cumbre Social que respaldó la última convocatoria de huelga general en España.

Una última cuestión relevante es la dimensión transnacional del conflicto y su muy compleja coordinación, que constituye uno de los factores explicativos centrales del bajo grado de efectividad alcanzado por los movimientos de protesta. Los sindicatos en España, Italia, Portugal y Grecia han sido

incapaces, hasta el momento, de alterar la senda de políticas de ajuste o de frenar sus consecuencias en términos de reparto desigual de esfuerzos, *dualización*, y transferencia inequitativa de rentas. Esto ha sido así, en parte, porque la crisis del euro es un fenómeno genuinamente transnacional ante el que las organizaciones sindicales han tratado de reaccionar atrincherándose en sus bastiones nacionales, paradójicamente cada vez más destartados como resultado del programa de reformas que la acompaña. La resistencia toma forma dentro de la arena nacional, más allá de las cuatro convocatorias de Días Europeos de Acción y Solidaridad contra la Austeridad, la última de ellas coincidiendo con la huelga general ibérica de 14 de noviembre de 2012, llevadas a cabo por la Confederación Europea de Sindicatos.

La europeización de los intereses laborales sigue siendo una cuestión pendiente, tal y como está mostrando crudamente el actual escenario de contestación. La ausencia de una verdadera respuesta europea por parte de los sindicatos refleja, por un lado, que efectivamente el impacto de la crisis está teniendo un carácter diacrónico e irregular; indudablemente, los trabajadores del Sur de Europa han sufrido mucho más, hasta el momento, sus rigores. Pero más allá de esta realidad, que es posible constatar a través de los indicadores macroeconómicos, los problemas de coordinación del sindicalismo europeo también muestran la enorme debilidad sobre la cual se han construido sus estructuras de representación. La Confederación Europea de Sindicatos, más allá de lo simbólico, carece de una capacidad real de liderazgo y, en ausencia de una voz autorizada del sindicalismo europeo, los movimientos de protesta nacionales corren el riesgo de identificar Europa como algo fundamentalmente negativo, pues es precisamente de sus oficinas técnicas de donde emanan las directrices del programa de ajuste. De ahí a derivar hacia el anti-europeísmo solamente hay un paso, que ya ha sido recorrido, por cierto, por pequeños sectores del frente de protesta en algunos países, comenzando por Grecia.

*VIEJOS Y NUEVOS REPERTORIOS DE PROTESTA. RESPUESTAS ESTRATÉGICAS DE LOS SINDICATOS EN EL SUR DE EUROPA*

España, Portugal, Italia, Francia y tal vez en menor medida Grecia, comparten características en cuanto a sus modelos de relaciones laborales. A la baja densidad de afiliación o el grado intermedio de coordinación de los procesos de negociación colectiva debe sumarse además la fragmentación ideológica de los sindicatos, más acusada en unos países que otros, o la existencia de una importante herencia de participación de los agentes sociales en los procesos de determinación política. Las experiencias corporatistas del Sur de Europa han sido definidas por la literatura a partir de su mayor inestabilidad e inconsistencia, al menos si se las compara con las de los países nórdicos, Alemania, Austria u Holanda. Aún así, los acuerdos corporatistas constituyeron en la década de los noventa uno de los elementos clave a partir de los cuales se definió la agenda de reformas que permitió el acercamiento al horizonte del euro. Un rasgo común del modelo de gestión de la crisis en el Sur de Europa es, precisamente, la ruptura de este equilibrio corporatista como resultado de la expulsión (o salida forzada) de los sindicatos del intercambio político. No obstante, es preciso señalar que, según el país concreto, existen diferencias en cuanto al grado de intensidad y continuidad de la fractura entre actores políticos y organizaciones sindicales, tal y como se explora a continuación.

*España. ¿Un nuevo espacio de protesta? Acción sindical e “indignación”*

La irrupción de la crisis en España, detectable sobre todo a partir del viraje decidido por el gobierno Zapatero en mayo de 2010, ha supuesto la transformación del marco de actuación de las relaciones laborales y, consecuentemente, el reposicionamiento de sus actores. La gestión económica de la crisis ha seguido las recomendaciones después de las autoridades europeas, cuyo carácter vinculante se ha ido intensificando. En paralelo y, sobre todo, tras la entrada en noviembre de 2011 de un nuevo ejecutivo conservador presidido por Mariano Rajoy, se ha producido una profunda

alteración de las reglas del juego que, en el ámbito de las relaciones laborales, ha tomado la forma de un estado de excepción normativo. La Reforma Laboral aprobada en febrero de 2012 ha supuesto, en palabras de Antonio Baylos, la ruina de la práctica del diálogo social como uno de los elementos fundamentales del sistema de relaciones laborales y, en paralelo, la negación a las organizaciones sindicales de su capacidad de regulación conjunta de las políticas económicas y sociales. En España es precisamente esta ruptura intencional de la concertación como instrumento de determinación política, que se produce en 2012, la que explica la toma de posiciones del sindicalismo frente al modelo de gestión de la crisis y su intento de conformarse como principal referencia dentro del movimiento de reacción civil.

(...) es justamente por esta depreciación del papel del sindicato como sujeto reconocido como parte negociadora en el espacio de la regulación general de las instituciones laborales, por lo que su rol político se acentúa como organizador social de la disidencia y portador de un proyecto alternativo en lo económico y en lo social que confronta con el proyecto político del gobierno, enfatizando frente a él su carácter esencialmente democrático y participativo. (Baylos, 2012: 17).

El avance de la crisis financiera en España, en sus múltiples vertientes, se ha visto acompañado de un claro desplazamiento del conflicto desde el ámbito laboral hacia el político, acelerando, ahora con velocidad de vértigo y bajo una lógica distinta, una tendencia presente en las relaciones laborales españolas desde mediados de la década de los ochenta. El desequilibrio en las cuentas públicas, a partir del cual se ha justificado un agresivo programa de retirada de coberturas sociales e incremento de la presión impositiva, la quiebra de una porción importante del sistema bancario, que llevó a la solicitud de un paquete de ayuda europeo en junio de 2012 o el hundimiento de sectores completos, como el de la construcción, que ha deprimido la demanda interna y ha disparado el desempleo por encima del 26% de la población activa, constituyen el fondo de escena económico sobre el cual se han operado importantes transformaciones políticas y sociales (Witte, 2012).

La crisis ha contemplado la erosión del sistema de representación y de los partidos políticos, a los cuales los ciudadanos sitúan ya como el tercero de los principales problemas del país según el barómetro del CIS. En paralelo y ante la aparente ausencia de alternativas dentro del arco parlamentario, la sociedad civil ha pasado a ofrecer un grado de movilización social que no se producía desde la transición a la democracia.

En este contexto, los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, cuya unidad de acción en el ámbito político ha sido una constante desde 1988, han alcanzado una importante capacidad de agregación de intereses, ampliando su representatividad más allá de las fronteras del conflicto económico y laboral. En el período 2008-2012, los sindicatos han convocado tres huelgas generales, han solicitado la convocatoria de un referéndum en el cual los ciudadanos puedan expresar su opinión acerca de la senda política escogida para hacer frente a la crisis y han tratado de cohesionar un amplio espectro de grupos de descontento, entre los cuales destaca sin duda el movimiento 15-M.

El principal instrumento de presión política puesto en marcha por las organizaciones sindicales ha sido, sin duda, la realización de tres huelgas generales. La primera de ellas tuvo lugar el 29 de septiembre de 2010 y fue convocada en contra del Real Decreto Ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo. El seguimiento de esta convocatoria según los datos que proporciona el barómetro del CIS fue bajo, situándose en el entorno del 14% de los trabajadores (unos 2,5 millones). La segunda fue llevada a cabo el 29 de marzo de 2012, ya con el Partido Popular en el poder y en reacción a la nueva reforma laboral introducida por el Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, mucho más agresiva que la anterior en su impacto sobre la regulación del mercado de trabajo y los equilibrios en las relaciones laborales. El seguimiento de esta segunda huelga general, nuevamente según los datos del CIS fue del 23,4% de los trabajadores. La tercera y última huelga del período, fue convocada el 14 de noviembre de 2012 en contra de la orientación general de las políticas de ajuste del gobierno. La celebración de esta huelga, que alcanzó un seguimiento del 21,4% de los

trabajadores, coincidió con otras dos huelgas generales de ámbito nacional, llevadas a cabo en Portugal y en Grecia, además de con movilizaciones y actos de protesta en otros países europeos, dentro de la estrategia conjunta definida por la Confederación Europea de Sindicatos para el cuarto Día Europeo de Acción y Solidaridad contra la Austeridad.

Junto a las huelgas generales, la conflictividad económica presenta también una elevada intensidad, que ha ido elevándose a medida que el impacto de la crisis se extendía a los distintos sectores de actividad. El sector público, desde luego, ha liderado la reacción ante los recortes en coberturas de bienestar desde el comienzo de la crisis, que también han afectado a las condiciones laborales de sus empleados. El grado de contestación se ha incrementado considerablemente desde la convocatoria de una primera huelga nacional del sector de la administración pública de 8 de junio de 2010, en respuesta al primer paquete de medidas de ajuste decidido por el gobierno Zapatero. La conflictividad en el sector público a lo largo de 2011 y, sobre todo, de 2012, se ha trasladado fundamentalmente al ámbito autonómico, con movilizaciones en la sanidad ('marea blanca') y en la educación ('marea verde'). Una característica interesante de la conflictividad dentro de estos sectores es que, al tratarse éstas de competencias descentralizadas, es posible encontrar diferencias significativas en el grado de agresividad del recorte entre comunidades autónomas y, por tanto, en el modelo de respuesta laboral.

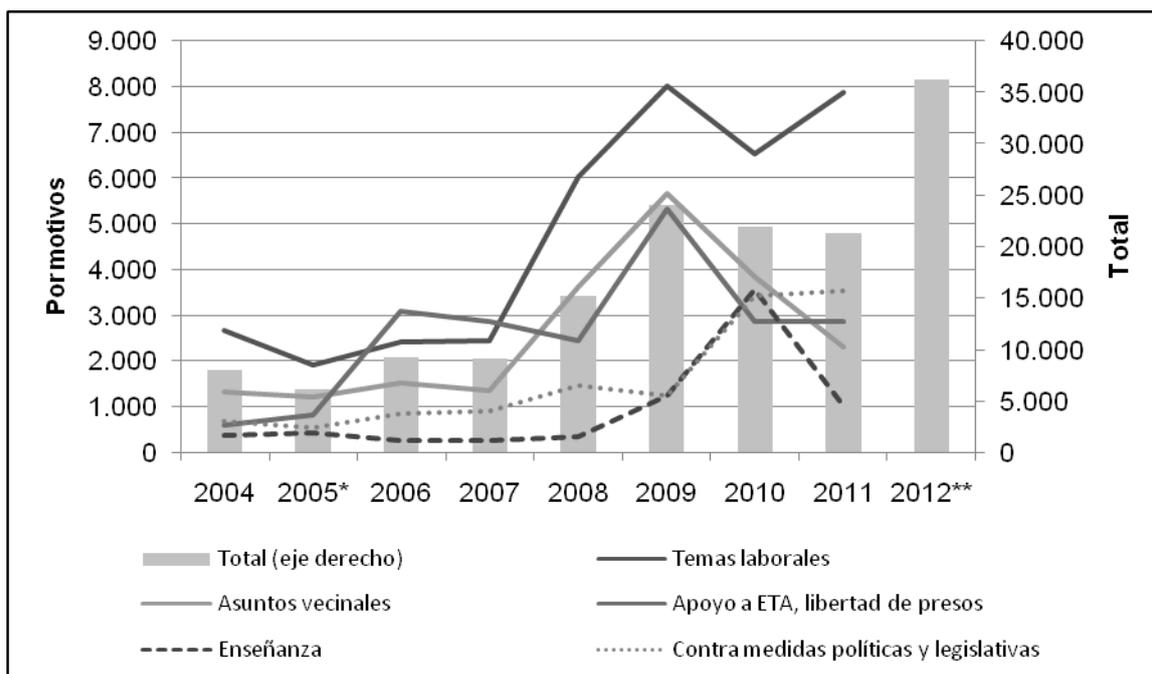
En el ámbito privado, la conflictividad económica ha afectado a múltiples sectores, también afectados por la crisis y en los que se han multiplicado los expedientes de regulación de empleo: transporte, minería, banca o astilleros. Un aspecto interesante, sin embargo, es el bajo nivel de conflicto que han mostrado las grandes empresas exportadoras del sector industrial, particularmente los ensambladores de automóviles. En estas empresas, los sindicatos han optado por un modelo de negociación de concesiones que ha tratado de acordar el mantenimiento del perímetro laboral o, al menos, el limitado de daños, a cambio de una degradación pactada de las condiciones salariales y laborales de los trabajadores, que se expresa en términos de

flexibilidad. La recuperación de la competitividad de las plantas españolas se ha tenido como consecuencia, en varios casos, de la deslocalización casi inmediata de producción procedente de otros centros de trabajo europeos que, de esta forma, se han visto afectados negativamente por esta práctica de ‘dumping social’.

El impacto de las huelgas políticas y de carácter sectorial en España, no obstante, debe ser interpretado a partir de la introducción de nuevas formas de protesta dentro del repertorio de los sindicatos. Éstas, a lo largo del período 2008-2012, muestran una característica peculiar, como es la conjunción del modelo tradicional de protesta laboral – la huelga – con la convocatoria, por parte de las organizaciones sindicales directamente o con su respaldo de movilizaciones civiles en forma de concentraciones o manifestaciones para ocupar el espacio público. El Gráfico 1 muestra cómo, desde 2008, el número de manifestaciones se ha disparado. En cuanto a su motivación, el mayor incremento tanto absoluto como relativo ha tenido lugar en aquellas manifestaciones convocadas por temas laborales y contra medidas políticas y legislativas, que prácticamente se ha triplicado desde el inicio de la crisis.

Además, y aunque las asociaciones ciudadanas siguen siendo las promotoras más frecuentes de las manifestaciones, la categoría formada por comités de empresas, trabajadores y sindicatos acumulan un 44,4% de las convocatorias de manifestación entre 2008-2011, situándose nueve puntos porcentuales por encima del periodo 2004-2007, según datos del Anuario Estadístico del Ministerio del Interior.

#### GRÁFICO 1. MANIFESTACIONES SEGÚN MOTIVOS MÁS FRECUENTES



*Fuente:* Elaboración propia a partir del Anuario Estadístico del Ministerio del Interior.

*Notas:* 2005 sin datos de la Comunidad de Madrid. Del 1 de enero al 26 de octubre de 2012, datos recopilados por las delegaciones del Gobierno a instancias del diputado de la Izquierda Plural Ricardo Sixto y publicados en prensa. No incluye País Vasco y Cataluña.

En el año 2012 y con datos sólo para los diez primeros meses, se han producido 36.232 manifestaciones, casi el doble que en todo el año anterior. Entre ellas cabe destacar, además de las manifestaciones que acompañaron a las tres huelgas generales de ámbito nacional, olas distintas de jornadas de movilización contra la reforma laboral convocadas por CCOO y UGT en varias ciudades de España durante el primer semestre de 2012 (19 de febrero, 29 de marzo, 23-24 de mayo).

La incorporación de esta herramienta del repertorio de acción colectiva no impide, no obstante, que los sindicatos españoles sigan encontrando algunos problemas a la hora de coordinar su estrategia de protesta con la sociedad civil. A pesar del apoyo prestado a la última convocatoria de huelga general por el heterogéneo conjunto de organizaciones que forman la denominada Cumbre Social o de la participación activa de militantes sindicales en el movimiento indignado o en las iniciativas “Rodea el Congreso” o la más reciente “Marea

Ciudadana”, el “sindicalismo oficial” despierta recelos por su supuesta contaminación por parte del mismo sistema contra el que se pretende reaccionar. Si los sindicatos desean convertirse en un sujeto político con capacidad de liderazgo en el plano de lo social éste es, sin duda, un reto que deben superar. Visto de otra forma, también es cierto que sin ellos resultará extremadamente complejo configurar una alianza de movimientos sociales amplia y capaz de constituirse como plataforma de protesta efectiva ante las políticas de gestión de la crisis.

*Portugal. Rescate europeo y quiebra de la paz social*

Portugal ha sido el alumno aplicado de la *Troika* formada por Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional y Comisión Europea desde que el primer ministro en funciones, José Sócrates, se vio obligado a solicitar el rescate financiero de su país el 7 de abril de 2011. Unos días antes, el propio Sócrates había visto como el parlamento portugués rechazaba el cuarto bloque de medidas de recorte que presentaba su Ejecutivo, forzándolo a dimitir. En mayo de 2011, la Eurozona aprobaba oficialmente un primer paquete de ayuda financiera de 78.000 millones de euros. Un mes después, el 5 de junio y tras seis años de gobierno socialista, los portugueses elegían al conservador Pedro Passos Coelho, del Partido Social-Demócrata para gestionar una compleja situación económica, política y de creciente inestabilidad socio-laboral. El gobierno de coalición de Passos Coelho, apoyado por el también conservador Centro Democrático Social – Partido Popular, se ha mantenido estable hasta 2013 y ha aplicado con rigor las políticas de ajuste diseñadas a escala europea (Busch, K., Hermann, C., Hinrichs, K. y Schulten, T., 2013).

La inestabilidad social en Portugal, no obstante, es previa a la materialización del rescate. Desde 2010, la inestabilidad económica provocada por la presión en los mercados hacia la deuda lusa provocó la puesta en marcha de un ambicioso programa de austeridad y reformas, inspirado en las recomendaciones de la *Troika* aunque no directamente impuesto por ella, tal y

como ha ocurrido después de mayo de 2011. Sus consecuencias han rebasado el plano político, puesto que más allá de provocar el mencionado cambio de gobierno, también han abierto un nuevo escenario de conflictividad socio-laboral que presenta importantes similitudes con el descrito para el caso español (Campos Lima y Martín Artiles, 2011). Portugal, como España, ofrece en el momento previo a la irrupción de la crisis y en sus primeros momentos un particular juego entre gobierno y sindicatos, definido por la combinación de pactos sociales *ad hoc* y huelgas generales que responde al modelo de corporatismo definido por ambos países a mediados de la década de los años noventa (Rhodes, 1998).

De esta forma, los primeros planes de austeridad presentados por el gobierno Sócrates en 2010 fueron contestados con la convocatoria de una huelga general de ámbito nacional por parte los sindicatos mayoritarios, CGTP y UGT, el 24 de noviembre de 2010. Antes, las organizaciones sindicales ya habían explorado otros caminos de contestación, como una gran manifestación de los trabajadores públicos, celebrada el 5 de febrero en Lisboa, que constituyó el primer gran acto de inquietud social en la crisis portuguesa y a la que siguió una huelga del sector público un mes después. A pesar de las protestas ante los planes de congelación salarial de los empleados públicos y de los cambios realizados en el sistema de jubilaciones, el gobierno y los agentes sociales portugueses aún pudieron firmar un conjunto de pactos sociales tripartitos sobre el camino a seguir por las reformas hasta los primeros meses de 2011, cuando la situación de la deuda portuguesa experimentó un rápido deterioro.

La ruptura entre sindicatos y gobierno se produjo en los meses finales de 2011, tras la convocatoria de una nueva huelga general justo un año después de la anterior, el 24 de noviembre de 2011 y sobre todo, a lo largo de 2012. Tras el rescate, las organizaciones sindicales se han visto expulsadas de todo tipo de proceso de concertación y han reaccionado, como en España, profundizando en la estrategia de confrontación política con el gobierno.

La convocatoria el 22 de marzo de 2012 de una cuarta huelga general, esta vez en solitario por parte de CGTP, se integra en un escenario de fuerte conflictividad que es posible describir a partir de la continuidad de huelgas económicas en distintos sectores, con un claro liderazgo del sector público y, en segundo semestre del año, del transporte. La conflictividad laboral se ha visto acompañada de manifestaciones en la calle. La reacción civil se ha apoyado en los sindicatos, como en la convocatoria del 15 de septiembre de 2012 contra los recortes impuestos por Europa, que se convirtió en la mayor concentración de protesta desde la Revolución de los Claveles de 1974. El origen, sin embargo, de esta manifestación no se encuentra directamente en las organizaciones sindicales, sino en un movimiento espontáneo denominado “Fuck the Troika”, que fue articulado a través de las redes sociales y que recibió el respaldo de las dos confederaciones sindicales mayoritarias, entre otras muchas organizaciones políticas y sociales. El movimiento “Fuck the Troika”, como el de los indignados españoles, ha tenido continuidad en las protestas de la sociedad civil desde entonces.

Las últimas grandes movilizaciones del otoño y del invierno de 2012 se han orientado a frenar la aplicación de algunas de las condiciones del Memorando de Entendimiento firmado con las autoridades comunitarias para facilitar el rescate. El gobierno portugués se ha visto obligado a retirar su iniciativa de reforma de la Seguridad Social que, entre otras controvertidas propuestas incrementaba las contribuciones sociales de los asalariados en siete puntos porcentuales, mientras reducía las correspondientes a los empleadores en seis puntos. La confrontación de un frente de rechazo a la misma, del que han formado parte las organizaciones sindicales, la oposición política y las asociaciones de empresarios ha obligado al gobierno de Passos Coelho a reconsiderar su postura, abriendo algunas fracturas en la coalición parlamentaria que lo apoya.

Dentro del espacio de las reacciones sindicales a la crisis, no obstante, el caso portugués ofrece algunas especificidades. A pesar de que el modelo de reacción a la difícil coyuntura económica ha ayudado a tender puentes de

colaboración entre las principales confederaciones sindicales, CGTP, de filiación comunista y formado en la lucha contra la dictadura de Salazar, y UGT, de orientación socialdemócrata y rearticulado en la transición hacia la democracia con el soporte financiero del sindicalismo centroeuropeo, no ha eliminado las tensiones entre ambos. La fuerte competencia sindical ha dificultado la coordinación de la protesta y en varias ocasiones UGT no ha secundado la organización de acciones colectivas por parte de la más agresiva CGTP, sobre todo a partir de 2012. Así, mientras las movilizaciones de 2010 y 2011 fueron convocadas conjuntamente por ambos sindicatos, a partir de este año es posible detectar un cambio de rumbo en la estrategia del sindicato socialdemócrata. UGT, de hecho, negoció en otoño de 2012 un acuerdo con el gobierno portugués que incluía, entre otros aspectos, la reducción de las prestaciones por desempleo y el incremento progresivo de la edad de jubilación. El acuerdo ha sido duramente criticado por CGTP. La crisis no ha eliminado la tradicional fragmentación ideológica del escenario sindical portugués. De hecho, las dos huelgas generales celebradas a lo largo de 2012 han sido convocadas en solitario por este último sindicato.

### *Italia. "Rescate" político y geometría variable de las reacciones sindicales*

La evolución política de Italia debe ser descrita a partir de la sustitución del gobierno Berlusconi por el gabinete técnico presidido por Mario Monti a partir de la escalada de la crisis de deuda en noviembre de 2011. La inestabilidad gubernamental, tan característica por otro lado del modelo político italiano desde la II Guerra Mundial, ha experimentado una aceleración desde abril de 2008, cuando la pérdida de apoyo parlamentario por parte del gobierno del primer ministro Prodi condujo a la convocatoria de elecciones anticipadas y al retorno de Silvio Berlusconi a la presidencia del Ejecutivo italiano. La victoria electoral de la coalición de centro-derecha supuso la apertura de un nuevo período de conflictividad laboral motivado por la introducción de cambios en el modelo de relaciones laborales del país, que afectaban fundamentalmente al

sistema de negociación colectiva. En octubre de 2008, la patronal Confindustria entabló conversaciones orientadas a pactar la orientación de estos cambios con las confederaciones sindicales CSIL, de orientación democristiana y con la socialdemócrata y laica UIL.

El principal sindicato del país, CGIL, históricamente vinculado al partido comunista italiano, renunció a participar en esta ronda de consultas y no firmó el acuerdo tripartito alcanzado finalmente por el gobierno, Confindustria y las organizaciones sindicales mencionadas el 22 de enero de 2009. La contestación social a lo largo de 2008 fue, no obstante, reducida. Únicamente cabe destacar la convocatoria, el 30 de octubre de 2008, de una huelga general en el sector educativo que reaccionaba ante la aprobación del Decreto-Ley de medidas urgentes en materia de educación y universidades.

A lo largo de 2009, la fractura de los intereses sindicales y la decisión de varios grupos industriales de gran tamaño, entre ellos el ensamblador de automóviles FIAT, de deslocalizar la producción fuera de Italia y cerrar algunas plantas, provocó un significativo incremento de la conflictividad económica y política. Profundizando su estrategia de contestación en solitario, CGIL se negó a renovar el convenio colectivo a escala nacional del sector metalúrgico, el más importante y el de mayor cobertura del país. Además, el 4 de abril de ese mismo año, el sindicato convocó una huelga general para protestar por la incapacidad del gobierno para hacer frente a la crisis económica y para mostrar su oposición al acuerdo sobre la reforma del sistema de negociación colectiva.

El aumento de las tensiones económicas en 2010 y la aparición en el horizonte de los problemas de consolidación fiscal llevaron al ejecutivo de Berlusconi a aprobar un duro paquete de reformas que afectaban, fundamentalmente, a las condiciones del empleo público y que incluían la suspensión de la negociación colectiva dentro de este sector para el período 2010-2012 y otras disposiciones orientadas a reducir los costes laborales de las administraciones públicas. El sindicato CGIL reaccionó llamando a una nueva huelga general de cuatro horas el 12 de marzo de 2010, en contra de las políticas de ajuste decididas por el

gobierno. A lo largo del año siguiente, la propia CGIL, otra vez en solitario, convocaría dos huelgas generales más, el 25 de junio y el 6 de agosto, ambas en contra de dos nuevos paquetes de ajuste aprobados por el gobierno Berlusconi siguiendo las recomendaciones del Banco Central Europeo, que intensificó ese verano su presión sobre las autoridades nacionales italianas condicionando la compra de deuda en el mercado secundario a la puesta en práctica de sus recomendaciones económicas.

La escalada de la crisis de la deuda soberana en otoño de 2011 condujo al “rescate” político de Italia, cuando las presiones internacionales llevaron al presidente de la República, Giorgio Napolitano, a forzar la sustitución del gabinete Berlusconi por un nuevo Ejecutivo de *técnicos* dirigido por el eurócrata Mario Monti. La llegada del gobierno técnico al poder abrió un nuevo escenario para la contestación a las medidas anti-crisis en Italia. Un mes después de la aprobación del primer paquete de austeridad por parte del nuevo Ejecutivo, las tres principales confederaciones sindicales (CGIL, CSIL y UIL) convocaron una serie de huelgas y manifestaciones que desembocaron en la huelga general de ámbito nacional de tres horas de duración que se celebró el 12 de diciembre de 2011 y que fue la tercera de ese año. Más allá de su efectividad, puesto que el éxito de seguimiento contrastó con la falta de capacidad para alterar los planes de ajuste del gobierno, la huelga de diciembre de 2011 supuso la apertura de una nueva fase de contestación social en Italia, cohesionando puntualmente la estrategia sindical y haciendo aún más visible la incorporación de la sociedad civil al frente de la protesta. La presencia de las nuevas formas organizativas de la sociedad civil, como el movimiento San Precario, junto al espacio electoral adquirido por opciones políticas situadas “en los márgenes del sistema”, como el partido Cinque Stelle de Beppe Grillo han consolidado un nuevo escenario, si cabe aún más complejo. Las movilizaciones de 2012, incluida la huelga general del 13 de abril, convocada (otra vez en solitario) por CGIL en contra de la reforma del mercado de trabajo y, sobre todo, el Día de Acción Europeo del 14 de noviembre, han mostrado un interesante desplazamiento del conflicto de los centros de trabajo a las calles, con masivas

concentraciones y duros enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en las calles de ciudades como Roma o Turín.

Dentro de este nuevo escenario, los sindicatos italianos y, en particular CGIL, encuentran menos dificultades que sus homólogos de otros países del sur de Europa para tender puentes de colaboración con los nuevos movimientos de la sociedad civil. Tras el colapso del modelo político de post-guerra en Italia a comienzos de la década de los noventa y la disolución de los partidos tradicionales, el sindicalismo italiano consiguió emanciparse del tutelaje político y se convirtió en la oposición más eficaz a los gobiernos conservador-populistas de Berlusconi, ganando espacio a una alternativa parlamentaria de izquierdas que resultó débil, fragmentada y poco eficaz. La desafección de la sociedad civil hacia el juego político no ha infectado a los sindicatos y eso les ha permitido liderar la reacción a la crisis con menores dudas de identidad y de co-responsabilización que en otros países, como Portugal y España. El alto grado de reconocimiento social de los sindicatos italianos, sin embargo, no ha frenado la pérdida progresiva de representatividad y capacidad de movilización en los centros de trabajo.

Además de la conflictividad en el espacio político, la estrategia de confrontación anti-sindical puesta en práctica por el principal empleador privado del país, la ensambladora de automóviles FIAT, ha introducido un nuevo punto de incertidumbre en las relaciones laborales italianas. La firma del acuerdo tripartito de negociación colectiva de enero del 2009, del cual decidió autoexcluirse CGIL, no ha impedido a la dirección de FIAT adoptar una posición de fuerza en su intento de romper con el patrón tradicional de prevalencia de la negociación colectiva sectorial sobre la negociación de empresa en Italia. FIAT tomó la decisión de abandonar Confindustria el 1 de enero de 2012 y desde entonces ha venido presionando a sus empleados, ya no cubiertos por el convenio sectorial, para iniciar una nueva dinámica de negociación a escala de empresa bajo la amenaza de nuevas deslocalizaciones. La medida de FIAT agrieta seriamente la estructura de la negociación colectiva en Italia y abre la puerta a nuevas salidas de grandes

empresas industriales. Por ese motivo y ante la potencial descomposición del sistema de convenios sectoriales, Confindustria y las principales confederaciones sindicales italianas, incluida esta vez CGIL, llegaron a un acuerdo el 28 de junio de 2012 en el que se introducen nuevas normas sobre la certificación de la representatividad para tomar parte en los procesos de negociación sectorial a escala nacional y sobre la relación de los convenios sectoriales sobre los de empresa. La incidencia del conflicto económico, en los últimos meses de 2012 y mientras el mandato técnico del gobierno Monti llega a su fin, se ha concentrado fundamentalmente en el sector del transporte.

*Grecia. Desmantelamiento económico y político; descomposición sindical*

Como germen de la crisis de la deuda dentro de la Zona Euro y primer afectado por ella, Grecia se ha convertido en el principal banco de pruebas de las políticas económicas de ajuste. El país ofrece un grado de descomposición económica y política que no resulta asimilable al de ningún otro escenario nacional en sur de Europa. La sucesión de gobiernos y de programas de asistencia por parte de las instituciones comunitarias y del Fondo Monetario Internacional no han servido, tal y como muestran los principales indicadores, sino para profundizar aún más en la espiral de recesión económica. El producto interior bruto griego representa, al cierre de 2012, poco más del 80% del que alcanzaba en el año de arranque de la crisis financiera en 2008 (Busch, K., Hermann, C., Hinrichs, K. y Schulten, T., 2013).

Además de en el ámbito económico, el período 2008-2012 ha resultado extremadamente convulso en lo social y en lo político, con cinco gobiernos distintos, cuatro de ellos en los últimos dos años. El deterioro de la escena política griega se ha traducido en la ruptura del bipartidismo tradicional y la emergencia de nuevas fuerzas que han adquirido una significativa representación parlamentaria. Algunas de ellas se sitúan directamente fuera del sistema, como el partido ultraderechista y xenófobo *Chrysi Avgi* (Amanecer Dorado). La volatilidad de los equilibrios políticos se ha asociado a la confusa

implementación de las exigencias económicas comunitarias vinculadas a la activación de los distintos tramos del rescate, con pulsos como los que en noviembre de 2011 y en plena explosión de la crisis de deuda en el sur de Europa forzó la dimisión del primer ministro socialista Yorgos Papandreu. Desde entonces, se han sucedido los gobiernos presididos por Lucas Papademos (de noviembre de 2011 a mayo de 2012), Panagiotis Pikrammemnos (de mayo a junio de 2012) y el conservador Antonis Samarás (desde el 20 de junio de 2012), siendo este último el que, dentro del período, ha gozado de mayor estabilidad parlamentaria.

En lo social, el elevado grado de descomposición del sistema ha arrastrado a las organizaciones sindicales que, desde la transición a la democracia en la década de los setenta, han mostrado una fuerte dependencia de los partidos políticos (Matsaganis, 2007). En total, los sindicatos han convocado 23 huelgas generales, la última de ellas el pasado 20 de febrero de 2013 mientras escribimos estas líneas. Sin embargo, la conflictividad laboral ha resultado completamente rebasada por la ebullición del enfrentamiento civil. El margen de maniobra de las dos principales confederaciones sindicales del sector público (ADEDY) y privado (GSEE) ha resultado muy reducido, acompañando en su pérdida de espacio representativo al partido socialista (PASOK), al que ambas se encontraban ligadas. Si cabe, la crisis económica ha incrementado la tradicional dualidad del sindicalismo griego, con una densidad de afiliación relativamente alta entre los empleados públicos y muy bajo nivel de penetración dentro del sector privado, donde es dominante el sindicalismo de empresa con una verdadera miríada de organizaciones de muy pequeño tamaño. La fractura entre ambos espacios de actividad económica y el abandono de los trabajadores del sector privado por parte del sindicalismo confederal ha sido puesta en evidencia dentro de su agenda de movilizaciones. El sindicalismo de clase en Grecia ha orientado su estrategia a contener la pérdida de rentas y derechos laborales de los empleados de un sector público que, además, ha concentrado el grueso de los paros sectoriales.

Los sindicatos griegos aparecen en el confuso marasmo de la protesta como una voz más, afectada por un alto grado de descrédito y no necesariamente de las más importantes. La atomización del espacio de reacción ante las políticas de ajuste y el rebasamiento de los sindicatos como portavoces del descontento social por parte de otras organizaciones y redes de resistencia y solidaridad de la sociedad civil parecen ubicar al sindicalismo griego ante un importante reto de supervivencia a corto plazo.

### *Francia. Conflictividad al filo de la crisis*

En los últimos cinco años, Francia se ha movido siempre en el filo de la crisis. Sin experimentar una situación tan tensa como la del resto de países del Sur de Europa y sin que su deuda soberana se haya visto sometida a un ataque tan directo, Francia ha podido vadear las dificultades económicas mostrando, sin embargo, unos escuálidos niveles de crecimiento. Eso sí, a medida que la crisis ha ido asentándose como una compañera estable de los países del Euro, la segunda economía de Europa parece haber ido descubriendo, no sin pesar, su orilla mediterránea.

La conflictividad laboral en Francia se ha concentrado fundamentalmente en el sector industrial, aquejado de fuertes problemas de competitividad que han ido acentuándose en los últimos años. La amenaza de deslocalización de actividades industriales intensivas en la utilización de mano de obra, como la siderurgia, y los problemas experimentados por varios campeones nacionales, como las empresas automovilísticas Renault o PSA, han abierto un escenario de confrontación en el que las organizaciones sindicales han conformado alianzas con los poderes públicos a escala local y nacional. Tal y como señalaba el enarca Alain Minc en un artículo de opinión publicado por el diario *El País* el 24 de noviembre de 2012, los intereses industriales franceses se están viendo seriamente afectados por las medidas de flexibilización y reducción de costes laborales emprendidos en los países del sur de Europa. La agenda de recuperación de competitividad a través de reformas laborales está

introduciendo un reto de “dumping social” ante el que la industria francesa encuentra muchas dificultades para reaccionar y que se está convirtiendo en una de las principales cuestiones de la agenda económica de sindicatos y gobierno (Schömann y Clauwaert, 2012). A este escenario de movilización debe sumarse el impacto de las recientes medidas de ahorro aprobadas por el gobierno Hollande para el sector público, que provocaron la convocatoria de paros en el transporte aéreo (Air France) y ferroviario (SNCF), en octubre de 2012.

Dentro del ámbito político, los sindicatos franceses habrían contribuido de forma muy significativa al desgaste del conservador Nicolas Sarkozy y al retorno a la presidencia de la República, casi treinta años más tarde, de un candidato socialista como François Hollande. Los principales episodios de protesta sindical contra el gobierno Sarkozy se produjeron en 2010. El sindicalismo francés, caracterizado por una extremada fragmentación ideológica, alcanzó por primera vez desde la década de los setenta un acuerdo de cooperación y estrategia conjunta ante la crisis cuyo objetivo fundamental fue reaccionar ante la iniciativa de reforma del sistema de pensiones del primer ministro Fillon, que retrasaba la edad de jubilación de 60 a 62 años (Natali, 2011). La convocatoria de once huelgas generales a lo largo de ese año no impidió la aprobación de la reforma, tras la cual la unidad de acción sindical se ha ido descomponiendo.

La victoria electoral de Hollande en mayo de 2012 ha acelerado ese proceso, abriendo nuevamente un importante hiato de fricción ideológica entre el principal sindicato francés, CGT, de tradición comunista y CFDT, de orientación socialdemócrata y tradicionalmente cercano al Partido Socialista Francés. El primero se ha autoexcluido (junto a *Force Ouvrière*) del acuerdo alcanzado en enero de 2013 por la principal organización patronal, MEDEF y los sindicatos CFDT, CFTC y CGC para la modificación del Código del Trabajo francés: “Nuevo modelo económico y social al servicio de la competitividad de las empresas y de la seguridad en el empleo”. El ejercicio de concertación auspiciado por el gobierno que ha facilitado esta histórica reforma de la

regulación laboral ha resultado incompleto. De hecho, CGT ya ha anunciado movilizaciones en contra del acuerdo, que proporciona mayor flexibilidad a las empresas a cambio de una extensión de los derechos de representación sindical en la toma de decisiones corporativas y de la ampliación de las coberturas de los desempleados, fundamentalmente en materia de formación.

*DISCUSIÓN. ESCENARIOS SIMILARES, REACCIONES “INDIGNADAS” PERO AÚN TENTATIVAS*

El análisis comparado de las formas de protesta en la periferia sur de Europa es indicador, en primer lugar, de la creciente precariedad de los movimientos sindicales y sociales y de sus limitadas posibilidades de influencia efectiva sobre los procesos de toma de decisiones políticas dentro del actual contexto de recesión económica. La dominación ejercida por la *narrativa* ultraliberal sobre el ámbito público deja poco espacio, si alguno, a las propuestas alternativas de gestión de la crisis. Las políticas de desregulación, de redistribución de rentas a favor del capital, de desarticulación o privatización de las coberturas de bienestar o de rediseño del Estado, que se encuentran en el origen de la crisis, constituyen también, paradójicamente, el catálogo de soluciones más vigoroso (si no el único presentado como posible) para tratar de salir de ella. La reacción de una parte de la sociedad civil que ha comenzado a percibirse a sí misma como perdedora es objeto de descrédito, cuando no de persecución directa, a través del fortalecimiento del carácter autoritario (despótico) del Estado. Las protestas sociales y las huelgas son tomadas como un pretexto para la criminalización de la oposición social y la desarticulación de la sociedad civil. Al fin y al cabo, la *narrativa* dominante no solamente es la más fuerte sino que es presentada como la única posible, tan irremediable y natural como el proceso económico sobre el que se sustenta y al que interesadamente describe.

Los países del sur de Europa, en mayor o menor grado y también en momentos distintos, experimentan los efectos de una crisis económica de

alcance mundial que se solapa con crisis domésticas. A los problemas de competencia del sector productivo en Francia, España, Portugal, Grecia o Italia, que están tratando de atajarse con una contundente agenda de devaluación interna vía costes laborales, hay que sumar la muy deficiente construcción institucional de la moneda única, que se ha traducido en intensas turbulencias de deuda de las que, por el momento, únicamente el primero de estos países ha quedado menos expuesto. La existencia de burbujas especulativas en el sector inmobiliario, la ineficacia y corrupción de las administraciones públicas, el peso de la economía sumergida con su impacto fuertemente negativo sobre la capacidad de recaudación fiscal, la débil articulación de las coberturas de bienestar o la segmentación y alto nivel de precariedad de los mercados laborales han convertido a la crisis financiera de 2008 en el inicio de un largo proceso de recesión estructural del que, cinco años más tarde, y a pesar de las reiterativas promesas de recuperación, aún no es posible atisbar ni siquiera una atenuación. La orientación de las políticas económicas, ortodoxamente adscritas al discurso liberal dominante – ordoliberal, de hecho, en Europa– provoca una profundización en la crisis, a través de la estigmatización *ex ante* de las opciones de estímulo a través del gasto público, como las que están tratando de aplicar otras economías nacionales, la supeditación de la economía real a la financiera, el debilitamiento de la capacidad de consumo de los asalariados, la desregulación del mercado de trabajo y el desmontaje de los sistemas de coordinación de la relación laboral a través de la negociación colectiva. A ello debe sumarse la desorientación y la ausencia de un discurso alternativo convincente por parte de una izquierda “apolillada” (Simone, 2012), que se siente parcialmente co-responsable y que arrastra un bajo nivel de crédito político entre sus bases electorales naturales desde hace lustros. El vaciado ideológico de la izquierda, a partir de la consolidación de los discursos de Tercera Vía en la década de los años noventa, ha contribuido, sin duda, a vaciar de obstáculos el camino para el argumentario ultraliberal y su particular gestión política de la crisis.

En función de la profundidad y de las especificidades domésticas de la crisis es posible encontrar a Grecia, a Portugal, a España o a Italia marcando distintos hitos de deterioro económico y convulsión social. Francia, por su parte, ofrece un grado de resistencia y de estabilidad superior y una mayor autonomía política. En todos estos países, no obstante, la situación económica se asocia a unos sistemas de representación pública debilitados y crecientemente deslegitimados, con práctica ausencia de fuerzas políticas capaces de articular y canalizar el descontento social. En este vacío de alternativas políticas eficaces dentro del sistema, los sindicatos se convierten en uno de los pocos referentes de la sociedad civil para articular el descontento desde la oposición política extraparlamentaria, aunque con dudas y con fuertes dificultades. Las organizaciones sindicales, en estos países, se caracterizan por una notable capacidad de movilización, a pesar de su débil estructura organizativa, sus bajas tasas de afiliación y su fragmentación ideológica. En ausencia de otras opciones, se muestran como el actor más adecuado para cohesionar la protesta, visibilizándola a través de su implantación organizativa en territorios y centros de trabajo y manteniéndola a medio y largo plazo.

Los sindicatos del sur de Europa están afrontando la crisis con una movilización masiva de sus recursos estratégicos tradicionales. Las huelgas, con especial protagonismo de las huelgas generales de carácter político, se han multiplicado desde el inicio de la crisis en 2008, acentuando una tendencia pre-existente en Europa. Desde la década de los años ochenta, el número de huelgas convocadas por motivos laboral-económicos y de jornadas perdidas presenta un comportamiento a la baja, sin embargo, el de huelgas generales aumenta. Las razones de este comportamiento diferencial del número de huelgas de una y otra índole son múltiples. En primer lugar, es evidente que la capacidad de influencia de los trabajadores y de los sindicatos en el ámbito de la empresa se ha visto debilitada de forma sistemática y continua como resultado de la aplicación de un programa de reformas orientado a des-coordinar las relaciones laborales y atomizar la negociación colectiva. En el ámbito político, sin embargo, se ha creado un espacio para que los sindicatos

terminen constituyéndose en el único portavoz incrustado en el sistema que defiende un programa alternativo y de resistencia. Por eso, a diferencia de las huelgas generales de contenido político de otros momentos históricos, las del período 2008-2012 se han visto limitadas a un carácter meramente defensivo ante medidas de recorte y pérdida de derechos laborales y sociales adquiridos.

Por otro lado, las huelgas de carácter económico se han concentrado en los servicios públicos y en algunos sectores concretos, como el del transporte. A pesar de su capacidad de movilización y de su visibilidad, la eficacia de estos instrumentos de lucha sindical resulta cada vez más limitada. En el mejor de los casos, ha forzado la retirada parcial de algunas medidas particularmente gravosas para estos colectivos laborales, en buena medida aún “privilegiados” al no haber engrosado todavía las filas de aquellos que han sido expulsados por el sistema. En Francia y quizás también en Italia, habrían contribuido a erosionar la estabilidad electoral de los gobiernos Sarkozy y Berlusconi, provocando un cambio de color político en el primero de estos países y la llegada de un gobierno técnico en el segundo.

En cualquier caso, las huelgas económicas y las huelgas políticas se enfrentan a un mismo problema de fatiga. Ambos modelos de huelga, y particularmente el segundo de ellos, no han resultado funcionales en su objetivo de alterar la agenda de reformas liberales emprendida desde el inicio de la crisis. Por eso, los sindicatos se encuentran ante el reto fundamental de desarrollar nuevas formas de presión que les permitan recuperar influencia sobre el proceso político de toma de decisiones o convertirse, si no lo hacen, en un interlocutor con capacidad de amenaza poco creíble. La exploración de nuevas formas de movilización, como las manifestaciones o las concentraciones de protesta en las calles, la formación de alianzas con grupos emergentes de la sociedad civil, como el 15-M en España y el San Precario en Italia o la transnacionalización de la estrategia sindical impulsada desde la Confederación Europea de Sindicatos son solamente tres de las vías, por ahora tentativas, puestas en marcha por las organizaciones sindicales y que persiguen recuperar la eficacia de la acción colectiva.

## REFERENCIAS

- Baylos, A. (2012), 'El sentido general de la reforma: la ruptura de los equilibrios organizativos y colectivos y la exaltación del poder privado del empresariado', *Revista de Derecho Social*, Nº 57: 9-18.
- Bordogna, L. y Cella, G.P. (2002), 'Decline or transformation? Change in industrial conflict and its challenges', *Transfer*, Vol. 8, Nº 4: 585-607.
- Boyer, R. (1996), 'The future of Unions: is the anglo-saxon model a fatality or will contrasting trajectories persist?', *British Journal of Industrial Relations*, Vol. 33, Nº 4: 545-556.
- Busch, K., Hermann, C., Hinrichs, K. y Schulten, T. (2013), *Euro Crisis, Austerity Policy and the European Social Model. How Crisis Policies in Southern Europe Threaten the EU's Social Dimension*. Friedrich Ebert Stiftung, Berlin.
- Campos Lima, A. y Martin Artiles, A. (2011), 'Crisis and trade union challenges in Portugal and Spain: between general strikes and social pacts', *Transfer*, Vol. 17, Nº 3: 387-402.
- Crouch, C. y Pizzorno, A. (comp.) (1978) [1991], *El resurgimiento del conflicto de clases en Europa Occidental a partir de 1968*. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid.
- Dubin, K. (2012), 'Coalitions against change: the (real) politics of labor market reform in Spain', *Spanish Labour Law and Employment Relations Journal*, Vol. 1, Nº 1-2: 47-63.
- Fukuyama, F. (1992), *El fin de la Historia y el último hombre*. Planeta, Barcelona.
- Gallas, A., Nowak, J. y Wilde, F. (eds.) (2012), *Politische Streiks im Europa der Krise*. VSA, Hamburg.
- Hobsbawn, E. J. (1959) [1969], *Rebeldes Primitivos. Estudio sobre las formas arcaicas de los movimientos sociales en los siglos XIX y XX*. Ariel, Barcelona.
- Judt, T. (2010), *Algo va mal*. Taurus, Madrid.
- Kelly, J. y Frege, C. (2004) *Varieties of Unionism: Strategies for Union Revitalisation in a Globalising Economy*. Oxford University Press, Oxford.
- Kelly, J. y Hamann, K. (2009), 'General strikes in Western Europe (1980-2008)', Political Studies Association Annual Conference, 7-9 April 2009, Manchester.

Kelly, J., Hamann, K. y Johnston, A. (2011), *Unions against governments: explaining general strikes in Western Europe (1980-2006)*. Working Paper 2011/261. Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones, Madrid.

Matsaganis, M. (2007), 'Union structures and pension outcomes in Greece', *British Journal of Industrial Relations*, Vol. 45, Nº 3: 537-555.

Natali, D. (2011), *Pensions after the financial and economic crisis: a comparative analysis of recent reforms in Europe*, ETUI Working Paper 7/2011. ETUI, Brussels.

Offe, C. (1992), *La sociedad del trabajo, problemas estructurales y perspectivas de futuro*. Alianza Editorial, Madrid.

Rhodes, M. (1998), 'Globalization, labor markets and welfare state: a future of `competitive corporatism`?', en M. Rhodes y Y. Mény (eds.), *The future of European welfare: a new social contract?* MacMillan, London.

Rodrik, D. (2012), *La paradoja de la globalización*. Antoni Bosch, Barcelona.

Shalev, M. (1989), 'Mentiras, mentiras detestables y estadísticas de huelgas: medición de las tendencias del conflicto laboral', en C. Crouch y A. Pizzorno (comp.), *El resurgimiento del conflicto de clases en Europa Occidental a partir de 1968 II*. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid.

Shömann, I. y Clauwaert, S. (2012), *The crisis and national labour law reform: a mapping exercise*. ETUI Working Paper 4/2012. ETUI, Brussels.

Shorter, E. y Tilly, C. (1985) [1974], *Las huelgas en Francia (1830-1968)*. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid.

Simone, R. (2012), *El monstruo amable. ¿El mundo se vuelve de derechas?* Taurus, Madrid.

Tilly, C. (1986), *The contentious French*. Belknap Press, Cambridge.

Todorov, T. (2012), *Los enemigos íntimos de la democracia*. Galaxia Gutemberg, Madrid.

Touraine, A. (1999), *¿Cómo salir del liberalismo?* Paidós Ibérica, Barcelona.

Touraine, A. (2011), *Después de la crisis. Por un futuro sin marginación*. Paidós Ibérica, Barcelona.

Vanberg, V.J. (2004), *The Freiburg School. Walter Eucken and Ordoliberalism*. Freiburg Discussion Papers on Constitutional Economics 4/2011. Walter Eucken Institut E.V., Freiburg.

Vandaele, K. (2011), *Sustaining or abandoning 'social peace'? Strike development and trends in Europe since the 1990s*. ETUI Working Paper 5/2011. ETUI, Brussels.

Wacquant, L. (2012), 'Three steps to a Historical Anthropology of actually existing neoliberalism', *Social Anthropology*, Vol. 19, N° 4: 66-79.

Witte, Lothar (2012), 'Austeritätspolitik in Europa: Spanien', *Internationale Politikanalyse*, August 2012. Friedrich Ebert Stiftung, Berlin.

TABLA 1. HUELGAS GENERALES DE ÁMBITO NACIONAL (2008-2012)

PAÍS	FECHA (2008-2012)	NÚMERO DE HUELGAS (2008-2012)	NÚMERO DE HUELGAS (1980-2006)
ESPAÑA	27 de septiembre de 2010 29 de febrero de 2012 14 de noviembre de 2012	3	6
PORTUGAL	24 de noviembre de 2010 24 de noviembre de 2011 22 de marzo de 2012 14 de noviembre de 2012	4	2
ITALIA	4 de abril de 2009 12 de marzo de 2010 25 de junio de 2011 6 de septiembre de 2011 12 de diciembre de 2011 13 de abril de 2012 14 de noviembre de 2012	7	11
GRECIA	21 de octubre de 2008 10 de diciembre de 2008 2 de abril de 2009 24 de febrero de 2010 5 de marzo de 2010 11 de marzo de 2010 5 de mayo de 2010 20 de mayo de 2010 23 de febrero de 2011 11 de mayo de 2011 15 de junio de 2011 21 de junio de 2011	23	33

	28 y 29 de junio de 2011 5 de octubre de 2011 19 y 20 de octubre de 2011 1 de diciembre de 2011 7 de febrero de 2012 10 y 11 de febrero de 2012 26 de septiembre de 2012 18 de octubre de 2012 6 y 7 de noviembre 2012 14 de noviembre de 2012 20 de enero de 2013*		
FRANCIA**	29 de enero de 2009 19 de marzo de 2009 13 de marzo de 2010 27 de mayo de 2010 24 de junio de 2010 7 de septiembre de 2010 19 de septiembre de 2010 23 de septiembre de 2010 12 octubre de 2010 19 de octubre de 2010 28 de octubre de 2010	11	7
TOTAL		48	59

*Fuente:* elaboración propia (huelgas generales período 2008-2012); Kelly, Hamman y Johnston (2011) (huelgas generales 1980-2006).

*Notas:* \*Se incluye la primera huelga general del año 2013 convocada en Europa;

\*\* En Francia muchas de las huelgas generales son, en realidad, huelgas sectoriales que afectan fundamentalmente al transporte y a las comunicaciones, que se suceden en serie y se acompañan de manifestaciones masivas.